CONSTANCIA SECRETARIAL: A despacho del señor Juez informando que en el presente asunto el apoderado de la parte ejecutada allegó reiteración de solicitud de terminación del proceso.

En providencia otrora se requirió a las partes para que manifestaran si la suma contenida en la Resolución SUB 170377 del 26 de junio de 2018 fue pagada al ejecutante (archivo 26 C01). Atendiendo el mismo, el apoderado del accionante manifestó que dicha suma no fue cobrada (archivo 27 ib.).

Asimismo, la abogada Yolanda Herrera Murgueitio, representante legal de la sociedad Servicios Legales Lawyers LTDA apoderada de Colpensiones, presentó renuncia al poder otorgado (archivo 30 C02). Subsiguientemente, Colpensiones aportó otorgamiento de poder general, amplio y suficiente a la Unión Temporal Representación Jurídica Colpensiones 2023 representada legalmente por el señor Mauricio Roa Pinzón e identificada con Nit. 901.761.609-8. Igualmente, aportó escrito de sustitución de poder en favor de la abogada Fabiola Andrea Saldaña Cuervo (archivo 31 ib.). Sírvase proveer.

La Dorada, Caldas, 7 de mayo de 2024.

Leydi Laura Arroyo Cisneros
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE LA DORADA, CALDAS

La Dorada, ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso:	EJECUTIVO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ÚNICA INSTANCIA A CONTINUACIÓN
Demandante:	CÉSAR JULIO CARTAGENA SÁNCHEZ
Demandado:	COLPENSIONES
Radicado:	17380-31-12-001-2019-00208-00

Auto Interlocutorio Nro. 1453

Vista la constancia que antecede, correspondiente al estudio de la terminación del proceso, se debe resaltar que en auto del 30 de octubre de 2020 el juzgado cognoscente aprobó la liquidación del crédito presentada por el apoderado del

ejecutante (archivo 17 C01), donde se avizora que la suma adeudada por Colpensiones corresponde a \$592.018 (archivo 15 ib.), suma que incluía las costas del proceso ordinario. Subsiguientemente, la administradora pensional pagó las costas procesales del ordinario de seguridad social, correspondientes al valor de \$150.000, las cuales fueron debidamente entregadas a favor del ejecutante (archivos 20 y 23 ib.).

En síntesis, no se accede a la solicitud de terminar el proceso ejecutivo, pues a la fecha queda pendiente por pagar la suma restante, esto es, **\$442.018** por concepto de reliquidación de la indemnización sustitutiva indexada, por parte de la administradora pensional al ejecutante.

Al respecto, se aclara que si bien COLPENSIONES expidió la Resolución SUB 170377 del 26 de junio de 2018 ordenando un pago al ahora ejecutante (archivo 26 C01), lo cierto es que el apoderado del accionante manifestó que dicha suma no fue cobrada y la entidad no allegó prueba de un desembolso efectivo del concepto allí incluido, por lo que el mismo no se puede tener por pagado.

Ahora bien, frente a la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, revisada la actuación completa, se advierte indispensable efectuar un control de legalidad a la misma, de conformidad con el artículo 48 del CPTSS, relativo al juez como director del proceso, y en aras de evitar decisiones inhibitorias, por lo que a continuación se expone:

El Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, Caldas, en auto del 12 de agosto de 2020 ordenó el levantamiento de las cautelas, arguyendo que: "la obligación que dio lugar a decretar el embargo de cuentas de la ejecutada fue el pago de la reliquidación de la indemnización sustitutiva y el mismo ya fue sufragado" (archivo 11 C02), bajo el entendido de que en la constancia secretarial previa a esa providencia se hizo mención a que "la parte ejecutante refirió que la entidad accionada ya había pagado el valor concerniente a la reliquidación de la indemnización sustitutiva". No obstante, no se avizora memorial en el sentido de que dicho concepto hubiese sido desembolsado en su totalidad.

En contraposición a lo anterior, revisadas las diligencias, se observa en el archivo 13 del cuaderno C01 que Colpensiones allegó acto administrativo donde se le reconocen al ejecutante unas sumas de dinero, que seguidamente el juzgado en providencia del 17 de julio de 2020 requirió a la parte accionante para que informara el recibo de dichos dineros, y actuando de conformidad, el apoderado de la parte activa presentó liquidación del crédito, donde se observa que de lo adeudado sustrae lo pagado - \$565.410- y expone el nuevo saldo adeudado por la administradora pensional, esto es,

la suma de \$592.018 correspondiente a la reliquidación de la indemnización sustitutiva indexada y las costas del ordinario (archivo 15 C01).

De cara a lo anterior, y al verificar que a la fecha al señor CÉSAR JULIO CARTAGENA SÁNCHEZ la ejecutada le adeuda la suma de **\$442.018** por concepto de reliquidación de la indemnización sustitutiva indexada, es menester que se continúen con en trámite de las cautelas decretadas en providencia del 30 de mayo de 2008.

Considerando que, como lo ha dicho de vieja data la jurisprudencia especializada (CSJ AL936-2020, reiterado en CSJ AL5615-2022): "Bastante se ha dicho que el juez no puede de oficio ni a petición de parte revocar, modificar o alterar un auto ejecutoriado, pero también que el error cometido en una providencia no lo obliga a persistir en él e incurrir en otros, menos, cuando su causa, como en este caso ocurrió, fue precisamente otro error. Por lo dicho, debe atenderse el aforismo jurisprudencial que indica que los autos ilegales no atan al juez ni a las partes".

Por consiguiente, el despacho realizará control de legalidad de la actuación, dejando sin efecto el auto proferido el 12 de agosto de 2020 por el juzgado que anteriormente conocía del proceso.

En su lugar, dado que, indebidamente se levantaron las medidas cautelares decretadas al inicio del presente proceso ejecutivo, esto es, embargo y retención de los dineros que llegare a tener la entidad ejecutada y se hallen depositados en las cuentas de ahorros, cuentas corrientes y CDTs en los bancos Davivienda, BBVA y De Occidente, se dispone **DECRETAR** las mismas, comunicando a las entidades bancarias para que procedan a inscribir las medidas cautelares decretadas en las cuentas de COLPENSIONES, teniendo en cuenta que operan **excepciones frente a la regla general de inembargabilidad**, de cara a la obligación que con la presente ejecución se persigue, esto es, el pago de reliquidación de la indemnización sustitutiva indexada reconocidas al ejecutante, en virtud de la sentencia proferida por la H. Corte Constitucional C-543 de 2013, la cual sustentó que existen unas excepciones a la regla general -inembargabilidad de recursos públicos-, las cuales son:

"i. **Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral** con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.

ii. **Pago de sentencias judiciales** para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos.

iii. Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible” (negritas fuera del texto original).

De conformidad con lo anterior, se revela que frente a la suma debida por COLPENSIONES al ejecutante **-\$442.018-**, no será atendible aducir la excepción de inembargabilidad; por ello deberá surtirse el embargo respecto de cuentas con la destinación específica, esto es, para el pago de sentencias judiciales e indexación. Específicamente, por la suma de \$239.332 correspondiente a reliquidación de la indemnización sustitutiva de vejez y \$202.686 a la indexación.

En ese orden, se limitará la cautela a dichos montos. Si bien en el auto que libró mandamiento de pago se habló de un límite superior, no debe perderse de vista que al interior del trámite se acreditaron pagos parciales.

De conformidad con lo dicho, realícense por Secretaría los oficios comunicando el decreto de las medidas cautelares, esto es, embargo y retención de los dineros que llegare a tener la entidad ejecutada y se hallen depositados en las cuentas de ahorros, cuentas corrientes y CDTs en los bancos Davivienda, BBVA y De Occidente, debiendo recaer sobre dineros con la correspondiente destinación específica, esto es, para el pago de sentencias judiciales, por valor de \$239.332, y ii) para el pago de indexación, la destinación deberá ser a los recursos correspondientes a dicho rubro o de sentencias judiciales, por valor de \$202.686. Se limita la cautela a los valores señalados.

Finalmente, en atención a la renuncia de poder allegada por la Dra. Yolanda Herrera Murgueitio, representante legal de la sociedad Servicios Legales Lawyers LTDA apoderada de la demandada, el despacho accede a la misma, al encontrarse ajustada a los parámetros establecidos en el artículo 76 del C.G.P., aplicable a esta litis por expresa remisión normativa del artículo 145 del CPTSS. Igualmente, se reconoce personería suficiente en los términos del poder sustituido a la abogada **Fabiola Andrea Saldaña Cuervo**, quien se identifica civilmente con la cédula de ciudadanía Nro. 38.144.977 y profesionalmente con la tarjeta Nro. 172.943 del C.S. de la J., para que actúe como vocero judicial de dicha entidad de acuerdo al mandato sustituido y allegado para el efecto.

Por lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE LA DORADA, CALDAS,**

RESUELVE:

PRIMERO: EFECTUAR control de legalidad en relación con el auto del 12 de agosto de 2020, dejándolo sin efectos.

SEGUNDO: DECRETAR la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que llegare a tener la entidad ejecutada y se hallen depositados en las cuentas de ahorros, cuentas corrientes y CDTS en los bancos Davivienda, BBVA y De Occidente.

TERCERO: LIBRAR por secretaría los oficios comunicando la medida decretada, teniendo en cuenta que operan **excepciones frente a la regla general de inembargabilidad**, de cara a la obligación que con la presente ejecución se persigue, debiendo recaer sobre dineros con la correspondiente destinación específica, esto es, para el pago de sentencias judiciales, por valor de \$239.332, y ii) para el pago de indexación, la destinación deberá ser a los recursos correspondientes a dicho rubro o de sentencias judiciales, por valor de \$202.686. Se limita la cautela a los valores señalados.

CUARTO: DENEGAR la solicitud de terminar el proceso ejecutivo, por lo expuesto en la parte normativa.

QUINTO: ACEPTAR la renuncia que como apoderada de COLPENSIONES presentó la Dra. Yolanda Herrera Murgueitio, representante legal de la sociedad Servicios Legales Lawyers LTDA, de conformidad con el inciso 4º del artículo 76 del Código General del Proceso.

SEXTO: RECONOCER personería jurídica a la Unión Temporal Representación Jurídica Colpensiones 2023 representada legalmente por el señor Mauricio Roa Pinzón e identificada con Nit. 901.761.609-8, para representar los intereses de COLPENSIONES de conformidad con poder otorgado. Igualmente, se reconoce personería suficiente en los términos del poder sustituido a la abogada **Fabiola Andrea Saldaña Cuervo**, quien se identifica civilmente con la cédula de ciudadanía Nro. 38.144.977 y profesionalmente con la tarjeta Nro. 172.943 del C.S. de la J., para que actúe como vocero judicial de dicha entidad de acuerdo al mandato sustituido y allegado para el efecto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BRAYAN STIVEN MORENO HOYOS

Juez

Firmado Por:
Brayan Stiven Moreno Hoyos
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Laboral 002
La Dorada - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4c0793cd2752190352e65e722afdb9f0c3211f1ad9438eff8ac2f508004cd401**

Documento generado en 08/05/2024 02:15:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>